



O. DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022

«Quiero mandar un mensaje de tranquilidad: en España no hay un problema de renuncia», dijo Yolanda Díaz a mediados de mayo. La vicepresidenta segunda del Gobierno rechazaba así cualquier paralelismo con la Gran Dimisión, el terremoto que desde hace dos años sacude el mercado laboral de EEUU y que sólo en 2021 se tradujo allí en el abandono voluntario de casi 50 millones de empleos. Un éxodo masivo espoleado por la insatisfacción y la falta de expectativas postpandémicas, sobre todo entre los *millennials* y la generación Z.

Díaz se quitaba de encima la sangría americana como quien espanta un bicho, pero lo cierto es que el número de profesionales españoles que dejaron sus trabajos por iniciativa propia se disparó en los cuatro primeros meses de 2022, hasta alcanzar en abril los 5.467. Es la cifra más alta desde que se elaboran las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social (2001). El anterior máximo histórico databa de septiembre de 2007, cuando 4.762 empleados se *autodespidieron* en plena euforia económica propiciada por el ladrillo.

Mientras EEUU lidia como puede con la Gran Dimisión, en España está pasando desapercibido otro fenómeno de un impacto socioeconómico colosal: la Gran Jubilación. La mitad de la plantilla de la Seguridad Social y la Función Pública se retirará a lo largo de esta década. El mismo porcentaje de profesores universitarios permanentes cesará su actividad en dicho periodo. Y cerca de un tercio de los profesionales de la Medicina dejará de prestar servicio en cinco años. Sintomática es la situación de los facultativos de la Atención Primaria, aquellos que han padecido la sobrecarga asistencial derivada de la lucha contra el Covid: hasta 12.000 de ellos podrían prejubilarse en breve asumiendo incluso la preceptiva penalización en la pensión.

Son tres instantáneas de un país envejecido, que

sufre la falta de relevo generacional de los profesionales nacidos en el *baby boom* autóctono (1957-1977) más allá de los trabajos de cuello blanco de la Administración: agricultores, ganaderos, transportistas y obreros de la construcción tampoco tienen quienes les reemplacen a medio plazo.

«Hemos llegado a este escenario porque la demografía es la que es»,

La famosa pirámide invertida de la que oímos hablar por primera vez en los tiempos de la EGB ha resultado ser una hoja de guillotina. Sin embargo, la falta de reposición de los seniors no es sólo atribuible al desequilibrio entre nacimientos y decesos. Que profesiones vistas durante décadas como garantía de estabilidad y proyección, y además con vocación de servicio público, susciten

responsabilidades en el débito de profesionales también habría que mirar hacia arriba.

«Se ha producido una mala planificación política. Desde hace 30 o 40 años se sabía lo que iba a pasar», denuncia Jordi Solé, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca). «No se ha afrontado porque en nuestro sistema político prima el cortoplacismo, se está pendiente del titular de mañana y todo el mundo confía en que el problema le explote a otro. Es un asunto gravísimo, porque reponer la mitad de la función pública en pocos años es imposible, al menos con unos estándares de calidad. Además, con cada día que pasa sin que se tomen medidas sucede lo mismo que con el cambio climático: las soluciones son peores».

«Lo que se debería haber hecho es planificar, planificar y planificar», coincide Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). «Si sabemos que un profesional de la medicina tarda en formarse un mínimo de 10 años para poder ejercer en el Sistema Nacional de Salud –seis años de carrera, examen MIR y cuatro o cinco de especialidad–, tenemos que anticiparnos».

El envejecimiento de la Administración central es palmario: su media de edad es de 52 años –55 en el caso de los A1 o altos funcionarios– y sólo el 12% tiene menos de 40. Solé, de 57, portavoz de un sindicato que representa a 20.000 funcionarios de carrera de distintas profesiones (abogados, diplomáticos, ingenieros...), ya alertaba el pasado mayo de que casi un millón de trabajadores del sector público está a las puertas de abandonar el servicio. El Gobierno aprobó entonces lo que definió como «la mayor oferta de empleo público de la Historia», con 44.787 plazas, que con las otras cuatro convocatorias hechas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez suman 143.869 plazas. Un 126%

más que con los Gobiernos de Mariano Rajoy, sacaba pecho la ministra portavoz María Jesús Montero.

La oferta –que no incluía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Justicia, con sus propios ámbitos de negociación– pretendía dar respuesta sobre todo a la gestión de políticas públicas y fiscales, transformación digital y cohesión social.

«La situación es preocupante», reconoce pese a todo Solé, jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en Tarragona. «El ciudadano está viendo las colas que hay para conseguir una cita previa, y vamos a ver retrasos en muchos ámbitos de la actuación administrativa. Se habla siempre de lo que más interesa al ciudadano, que es el servicio público. Pero pensemos en órganos de control como la inspección de Hacienda. Todos sabemos que en ningún país, y menos en los mediterráneos, la disposición a pagar impuestos es muy alta. Cuando empiecen a desfallecer las plantillas de inspectores o merme el nivel técnico de los compañeros entrantes, el servicio se resentirá».

Fedeca ha solicitado a los ministerios de Hacienda y Asuntos Sociales que estudien la posibilidad de prorrogar la jubilación de los funcionarios hasta los 72 años, como han logrado los notarios y registradores de la propiedad recientemente.

No hace falta imaginar lo que podría pasar si mañana usted va a la ventanilla del SEPE y no le atiende nadie porque Ernesto o Pilar, después de toda una vida, ahora se dedican a sus aficiones y a echar una mano con los nietos. No hace falta imaginárselo porque esas situaciones ya se están produciendo. Fedeca informa de que en una de las últimas convocatorias del Cuerpo Nacional Veterinario había 12 candidatos para 15 plazas. Hablamos de funcionarios clave. Seguro que les conoce: son los que se encargan de la seguridad alimentaria. La zoonosis y tal.

La situación en la Sanidad pública tampoco es alentadora. El último *Estudio sobre Demografía Médica*, presentado en 2018 y elaborado por la CESM y la Organización Médica Colegial de España (OMC), reveló que el 31,9% de los facultativos en activo tenía entre 55 y 65 años y otro 9,1% había superado los 65. Traducido: el 41% de los médicos (entre 70.000 y 90.000) se jubilará en 10 años.

Las estimaciones eran alarmantes... y llegó el coronavirus. «Ha provocado que muchos profesionales padezcan estrés, estén sobrecargados y se estén planteando lo contrario de lo que se planteaban antes: pedir una prórroga de jubilación», confiesa Del Pozo, médico

FUNCIONARIOS, PROFESORES Y MÉDICOS: EL VACÍO DE LA GENERACIÓN 'BABY BOOM'

Séniors sin relevo. La mitad de la plantilla de la Seguridad Social y de los docentes universitarios se jubilan en 10 años. Y un tercio de los doctores, en cinco. No tienen reemplazo. «Es gravísimo», alertan

JOSE MARIA ROBLES

ILUSTRACIÓN DE JOSETXU L. PIÑEIRO

apunta a lo más evidente Emilia Riesco, profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y especialista en envejecimiento. «El índice de fecundidad es muy bajo. Por suerte, tenemos mejor esperanza de vida que hace décadas, a pesar del efecto de la pandemia en la tasa de mortalidad, que nos ha hecho retroceder casi un año a mujeres y hombres», añade la docente.

tan poco interés entre los jóvenes se podría explicar igualmente por la escasa predisposición a la movilidad geográfica o el desajuste entre el sistema educativo y las necesidades productivas. Incluso la digitalización a gran escala, que está engullendo muchas funciones de la burocracia presencial, es susceptible de ser vista como factor disuasorio. Pero a la hora de depurar